



## PUNTO DE QUIEBRE ¿SE TERMINÓ LA CORRUPCIÓN?



FERNANDO  
MARTÍNEZ  
GONZÁLEZ

@FER\_MARTINEZG  
FERMX99@HOTMAIL.  
COM

El Presidente López Obrador jamás imaginó lo difícil que sería terminar con la corrupción. A pesar de los discursos triunfalistas que cada mañana escuchamos en las conferencias matutinas en el sentido de que ya se acabó

con ese mal que tanto daño ha causado al país, en los hechos podemos ver que todavía abundan los servidores públicos que hacen de las suyas a través de las compras y contrataciones públicas.

Un caso emblemático de esta situación es el ISSSTE, que dirige Pedro Zenteno, en donde los funcionarios encargados de las adquisiciones están bajo el reflector por una serie de irregularidades detectadas en diferentes procesos licitatorios. Recientemente el diputado del PAN Jorge Triana, denunció ante el pleno de la Cámara de Diputados los malos manejos que, desde la Dirección de Administración, a cargo de Almendra Ortiz, se realizan para beneficiar a empresas y de los que ya se ha dado parte a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción.

El caso más reciente es el relacionado con la contratación del "Servicio Administrativo de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos" para los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025, identificado bajo el número IA-51-GYN-051GYN005-N-83-2023. Esta compra llama la atención por el monto del contrato, más mil millones de pesos.

Originalmente se

buscó evitar cualquier intento de corrupción al realizarlo bajo el esquema "Contrato Marco", sin embargo, esto no fue suficiente para detener los intereses creados por el personal de administración y finanzas, quienes usaron todas las trampas y argucias conocidas para descalificar a los diferentes concursantes y otorgarle el fallo a la empresa de su preferencia. Esto a pesar de existir una diferencia de más de 400 millones de pesos con respecto de los siguientes concursantes.

Fuentes inmersas en el proceso señalan directamente a Juan Carlos Suárez Guzmán y Alfredo de la Vega López, ambos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, por efectuar maniobras para descalificar, a través de engaños, a las empresas Black Ecco S.A. de C.V., Industrias Sandoval S.A. de C.V. y Sistemas Contino S.A. de C.V.

Según refieren estas fuentes, los funcionarios establecieron cambios de último momento en la junta de aclaraciones para generar desconcierto entre los participantes, y con esto crear lagunas para evitar una evaluación equitativa de las propuestas. Por si fuera poco exigieron requisitos imposibles de cumplir, no obstante que la legislación y reglas establecidas por el famoso "Contrato Marco", establecido por la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de la República, prohíbe cualquier cambio o modificación de los alcances y especificaciones requeridas, precisamente para evitar este tipo de maniobras. Todo esto se hizo ante la presencia de María Teresa Ticó Moreno, quien fungió como testigo social en el proceso.

Esta falta de claridad en el concurso logró favorecer a la empresa Comercializadora DOPAJ S.A. de C.V., conocida por representar al fabricante Sharp, utilizado recurrentemente por los



antiguos gobiernos neoliberales, con un contrato superior a los 1,240 millones de pesos.

Las sospechas de corrupción se elevaron al momento en que la dependencia decidió ocultar los precios unitarios de DOPAJ, representada por Héctor Cruz Martínez, con lo que evitó un análisis detallado de su propuesta económica, y se limitó a adjudicarle el contrato basándose únicamente en el presu-

puesto asignado por la dependencia.

¿Será que a estas alturas del sexenio ya no se necesita la austeridad republicana? o simplemente estamos tan distraídos viendo como ruedan las corcholatas que se nos escapan detalles de cientos de millones de pesos. La corrupción más viva que nunca.

**Un caso emblemático de esta situación es el**

**ISSSTE, que dirige Pedro Zenteno, en donde los funcionarios encargados de las adquisiciones están bajo el reflector por una serie de irregularidades detectadas en diferentes procesos licitatorios.**

